

Antofagasta, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Margarita Angulo Huerta, Abogada Defensora Penal Pública, domiciliada en Pasaje Isaac Arce N°249, oficina 401, Antofagasta, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, deduce acción de amparo constitucional en favor de Yeffri Diaz Peña, imputado en causa RIT 12-2021, RUC 2100038335-7, del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, en contra de la Jueza Lisette Morgado Lara del Juzgado de Letra y Garantía de Mejillones, por resolver en audiencia de 6 de abril de 2023 prorrogar el plazo de investigación incurriendo con ello en una acción arbitraria e ilegal que afecta la libertad personal y el debido proceso del amparado, para que se ordene revocar la resolución recurrida y en definitiva, adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos del amparado.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que con fecha 18 de enero de 2021 el amparado fue formalizado por los delitos de Homicidio simple, porte de arma prohibida y realizar disparos injustificados en la vía pública, fijando un plazo de investigación de 60 días.

Si bien se decreta en su contra la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con fecha 02 de septiembre de 2021 se modifica la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre el representado, por las comprendidas en el artículo 155 letras a), c), d) y g). Luego, con fecha 17 de febrero de 2022, se modifica la medida cautelar, específicamente del artículo 155 letra a) a su modalidad de total. Detalla que con fecha 25 de marzo del 2021 el plazo fue ampliado por 45 días; el 13 de mayo del 2021 se vuelve a ampliar por 45 días; el 01 de julio de 2021 por 45 días; el 26 de agosto del 2021 por 60 días; el 01 de diciembre del 2021 se amplía investigación por 60 días; el 08 de febrero de 2022 se amplía por 30 días; el 30 de marzo de 2022 se amplía por 60 días; el 8 de junio del 2022 se vuelve a ampliar el plazo por 15 días.

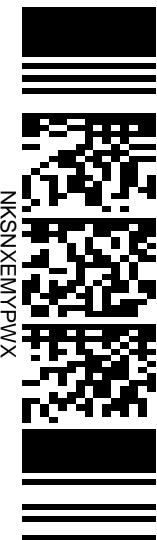


Indica que con fecha 10 de agosto el amparado es reformatizado como autor de los delitos de homicidio simple y porte de arma adaptada y se cierra la investigación. Sin embargo, en audiencia de fecha 8 de septiembre de 2022, a petición de la querellante se reabre la investigación, fijando el tribunal plazo de 60 días, el cual fue prorrogado con fecha 24 de noviembre de 2022 por mismo plazo de 60 días, los cuales con fecha 09 de febrero de 2023 nuevamente prorroga por 60 días.

Así, con fecha 06 de abril de 2023 se realiza audiencia de apercibimiento de cierre, en la cual el Ministerio público nuevamente solicita prórroga del plazo de investigación, la defensa se opone, pero el tribunal accede ampliando por 60 días la investigación.

Sostiene que la resolución dictada por la recurrida ha sido expedida en forma ilegal y arbitraria, al retardar de manera injustificada la tramitación del proceso del amparado lo que implica una afectación sustancial a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, pues la causa lleva más de dos años en investigación, incluso se había cerrado y se volvió a reabrir con fecha 08 de septiembre del año 2022, fijando un plazo de investigación el cual se amplió en dos oportunidades, contraviniendo lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal que solo permite por una sola vez ampliar dicho plazo.

Además la dilación excesiva de la investigación contraviene el derecho a la libertad personal y seguridad individual consagrado en el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental, toda vez que el representado fue formalizado con fecha 18 de enero de 2021, misma fecha en la cual se decreta su prisión preventiva, la cual si bien fue modificada por la medida cautelar de arresto domiciliario parcial y luego posteriormente total, su libertad ha sido restringida por un tiempo desproporcionado por lo que la resolución que se impugna deviene en ilegal, constituyendo una amenaza a la libertad del representado, desde que ésta se ve necesariamente condicionada por la extensión excesiva de la investigación, en la especie, más allá del término máximo de dos años, contados desde la formalización. Refiere que la Excma. Corte de Suprema, se ha pronunciado al respecto, manteniendo una línea jurisprudencial, como es en causa Rol 18538-2022. De fecha 02 de junio del 2022, señalando lo siguiente: *"3.- Que, así las cosas, la resolución impugnada deviene en ilegal, constituyendo una amenaza a la libertad del*



amparado, desde que su privación de libertad se ve necesariamente condicionada por la extensión excesiva de la investigación, en la especie, más allá del término máximo de dos años contados desde la formalización, que el artículo 247 del Código Procesal Penal perentoriamente establece para su duración".

En igual sentido, el Excelentísimo tribunal en causa Rol 50.850-2023 indica: "2.- Que, en tal sentido, conviene citar lo dispuesto en el inciso primero del artículo 247 del Código Procesal Penal, precepto que imperativamente dispone que Transcurrido el plazo de dos años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, es decir, dicha norma obliga al Ministerio Público a cerrar la investigación una vez cumplido el plazo máximo que estableció el legislador para su extensión.

3.- Que la antes citada norma, constituye una garantía del imputado al juzgamiento dentro de un plazo razonable -que se encuentra consagrada en el artículo 7 N° 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, que debe ser ponderada con la circunstancia de haber sido primitivamente formalizado el amparado con fecha 02 de marzo de 2021.

De lo anteriormente expuesto se sigue que, a la data en que fue reformalizado el recurrente y se decretó a su respecto la medida cautelar de arraigo nacional, a saber, el 10 de marzo de 2023, transcurrió con creces, el término máximo de extensión de la investigación estipulado por el código adjetivo.

4.- Que, así las cosas, la resolución impugnada deviene en ilegal, constituyendo una amenaza a la libertad del amparado, desde que ésta se ve necesariamente condicionada por la extensión excesiva de la investigación, en la especie, más allá del término máximo de dos años, contados desde la formalización, que el artículo 247 del Código Procesal Penal perentoriamente establece para su duración"

Concluye que la resolución del tribunal A quo, además de ser ilegal, se torna arbitraria, pues al dilatar excesivamente el plazo de investigación conociendo la medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre el representado, atenta contra las garantías afectadas más aún, si existe norma expresa que regulan el límite de la investigación y de las medidas cautelares las que deben ser temporales.

SEGUNDO: Que Lisette Morgado Lara Jueza Suplente Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, informa que en causa RIT 12-2021, del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, el imputado



Yefri Stiven Díaz Peña fue formalizado el 18 de enero de 2021 por los delitos de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 390 N°2 del Código Penal; Porte de arma prohibida, previsto y sancionada en el artículo 14 con relación al artículo 3 de la Ley 17.798; y por realizar disparos injustificados en la vía pública, artículo 14 D con relación al artículo 3 de la Ley 17.798, todas en calidad de autor y en grado consumado.

Además, con fecha 16 de abril de 2021, interpone querrela, en representación de las víctimas, el Centro de Apoyo a las Víctimas de Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en contra del imputado Yefri Stiven Díaz Peña. Expone que en audiencia celebrada el 10 de agosto de 2022 fue reformatizado por los delitos de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal y por el delito de Porte de Arma Adaptada, previsto y sancionado en el artículo 14 en relación al artículo 3, ambos de la Ley 17.798, en calidad de autor y grado de desarrollo consumado. Además, fue cerrada la investigación por el Ministerio Público, sin embargo, consta que dentro de plazo legal por solicitud de la parte querellante se reabre la investigación en audiencia celebrada el 8 de septiembre de 2022, fijándose un plazo de investigación de 60 días -la que no fue impugnada-, siendo prorrogada con fecha 24 de noviembre de 2022 por el plazo de 60 días, y con fecha 9 de febrero del año en curso nuevamente se aumenta por 60 días, por encontrarse diligencia pericial pendiente.

En este contexto, con fecha 6 de abril del año en curso, se realiza audiencia de apercibimiento de cierre de investigación -por solicitud de la defensa- y discusión de prórroga del plazo de investigación -por solicitud del Ministerio Público- abriéndose debate al efecto. En este sentido, la fiscal titular solicitó la ampliación del plazo de investigación por 60 días, por encontrarse pendiente diligencias solicitadas por la parte querellante, que dicen relación con un informe planimétrico, señalando que una vez que se cuente con el mismo, se debe coordinar una reconstitución de escena. Hizo presente que las diligencias pendientes son realizadas por policía especializadas, Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile -LABOCAR-, los que tienen actualmente una demora importante en la entrega de informes y de realización de pericias.

Por su parte, el abogado querellante se adhirió a la solicitud de ampliación de plazo de investigación, indicando que



en su oportunidad se cerró la investigación y se reapertura por su solicitud, debido a que en reiteradas ocasiones pidieron la diligencia pendiente, la que fue motivo de discusión en la audiencia pasada, en la que el Ministerio Público explicó que existe un perito en la región que pueda hacerse cargo de efectuar la diligencia, lo que genera una dificultad que ha impedido su eventual realización, la que consideran completamente relevante, ya que justamente tanto la teoría de la parte querellante, Ministerio Público y como de la defensa, dependen de configurar la materia del dolo, siendo la pericia pendiente la que viene a ser determinante.

A su vez, habiéndosele conferido traslado a la defensa, se opuso en primer lugar a la ampliación de plazo, instando por el cierre de la investigación y en subsidio solicitó que no se amplie por más de 40 días.

Para resolver la procedencia de ampliación de plazo, se tuvo en consideración la solicitud en subsidio que realizó la defensa, esto es, ampliar por un plazo no superior a 40 días y, además, que los argumentos esgrimidos por la fiscal y el querellante se encontraban fundados y razonables, atendido, entonces, el único perito del LABOCAR que realiza la diligencia de informe planimétrico y con el fin de que no se vuelva a discutir nuevamente el plazo de investigación, fue otorgada por 60 días y no por 40 días como lo había solicitado en subsidio la defensa.

Concluye que la resolución que dispuso la ampliación del plazo de la investigación no tiene relación procesal ni sustantiva con la medida cautelar que se encuentra sujeto el imputado, ya que no se encuentra con arresto domiciliario total a causa de la resolución judicial, sino que es a propósito de la resolución que dispuso la cautelar, cuya subsistencia procesal es diversa al plazo de investigación del Ministerio Público, puesto que la naturaleza jurídica propia de toda medida cautelar es eminentemente provisional, sustituible y modificable.

TERCERO: Que el recurso de amparo se estableció en el artículo 21 de la Constitución Política de la República para garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, únicamente respecto de "todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las leyes, para que la magistratura ordene el cumplimiento de las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección



del afectado"; en consecuencia, el presupuesto esencial es que se disponga una privación de libertad fuera de los casos previstos por la ley o con infracción a lo estatuido en la Constitución o en las leyes, sin las formalidades legales.

CUARTO: Que son hechos de la causa que con fecha 18 de enero de 2021 el imputado Yefri Stiven Díaz Peña fue formalizado por los delitos de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 390 N°2 del Código Penal; Porte de arma prohibida, previsto y sancionada en el artículo 14 con relación al artículo 3 de la Ley 17.798; y por realizar disparos injustificados en la vía pública, artículo 14 D con relación al artículo 3 de la Ley 17.798, todas en calidad de autor y en grado consumado. Luego, con fecha 10 de agosto de 2022 fue reformalizado por los delitos de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal y por el delito de Porte de Arma Adaptada, previsto y sancionado en el artículo 14 en relación al artículo 3, ambos de la Ley 17.798, en calidad de autor y grado de desarrollo consumado. En la misma oportunidad fue cerrada la investigación por el Ministerio Público.

Consta que dentro de plazo legal a solicitud de la parte querellante, se reabre la investigación en audiencia celebrada el 8 de septiembre de 2022, fijándose un plazo de investigación de 60 días, siendo prorrogada con fecha 24 de noviembre de 2022 por el plazo de 60 días, y con fecha 9 de febrero del año en curso nuevamente se aumenta por 60 días, por encontrarse diligencia pericial pendiente.

Así, con fecha con fecha 6 de abril del año en curso, se realiza audiencia de apercibimiento de cierre de investigación y discusión de prórroga del plazo de investigación; resolviendo ampliar el plazo de investigación por 60 días, por encontrarse pendiente informe planimétrico.

QUINTO: Que a efectos de resolver deben observarse las normas procesales vigentes en esta materia.

Así, el inciso primero del artículo 247 del Código Procesal Penal, dispone imperativamente que *"Transcurrido el plazo de dos años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla"*, es decir, dicha norma obliga al Ministerio Público a cerrar la investigación una vez cumplido el plazo máximo que estableció el legislador para su extensión.

Dicho aquello, debemos considerar las disposiciones del artículo 257 del Código Procesal Penal, en cuanto el querellante



habiendo hecho uso de su derecho, solicito la reapertura de la investigación, norma que establece en sus incisos 2° y 4° que;

"Si el juez de garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. Podrá el fiscal, en dicho evento y por una sola vez, solicitar ampliación del mismo plazo."

"Vencido el plazo o su ampliación, o aun antes de ello si se hubieren cumplido las diligencias, el fiscal cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma señalada en el artículo 248."

De esta manera, encontramos un segundo grupo de normas que obligan al Ministerio Público a que una vez reabierta la investigación puede solicitar ampliación de plazo por una sola vez, vencido el plazo o su ampliación cerrará la investigación y procederá conforme al artículo 248 del Código Procesal Penal, cuestión desatendida por el ente persecutor y la Jueza recurrida, desde que, reabierta la investigación con fecha 8 de septiembre de 2022, se concede en audiencia de 6 abril de 2023 una tercera prórroga del plazo de investigación más allá del plazo de 2 años que tiene el Ministerio Público para el cierre de la investigación y en inobservancia de las disposiciones del artículo 257 del Código Procesal Penal.

SEXTO: Que tal como ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en los fallos citados por el recurrente, constituye una garantía del imputado el juzgamiento dentro de un plazo razonable -que se encuentra consagrada en el artículo 7 N°5 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, por lo que la resolución impugnada deviene en ilegal, constituyendo una amenaza a la libertad del amparado, desde que ésta se ve necesariamente condicionada por la extensión excesiva de la investigación, en la especie, más allá del término máximo de dos años, contados desde la formalización, que el artículo 247 del Código Procesal Penal perentoriamente establece para su duración y las sucesivas prorrogas en contravención a lo dispuesto en el artículo 257 de Código Adjetivo.

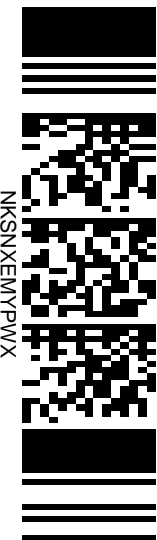
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N°7 y 21 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, **SE ACOGE**, el recurso de amparo deducido por Margarita Angulo Huerta, Defensora Penal Pública, en favor de Yeffri Diaz Peña, en contra de la resolución de fecha 6 de abril de 2023



dictada por la Jueza Lisette Morgado Lara del Juzgado de Letra y Garantía de Mejillones, dejándose sin efecto la totalidad de lo obrado en la audiencia realizada con fecha 6 de abril de 2023, en los autos RIT N°12-2021 del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, debiendo dicho tribunal fijar, a la brevedad posible, una audiencia para discutir únicamente el apercibimiento de cierre de la investigación, citando a todos los intervinientes para tal efecto.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°95-2023 (AMPARO)



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Eric Dario Sepulveda C. y Abogado Integrante Carlos Cabezas C. Antofagasta, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

En Antofagasta, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

